



FUJIDATOS

DECISION POLITICA Y VICTORIA SOBRE LA SUBVERSION

Boletín Interno N° 32

Año 2009



Se habían cumplido poco más de 10 años de violencia terrorista cuando Alberto Fujimori asumió el gobierno del país. Para entonces, el escenario nacional era apocalíptico: 17 mil muertos, 20 mil millones de dólares en pérdidas económicas, miles de desplazados, viudas y huérfanos, la tercera parte del territorio nacional declarado en Estado de Emergencia, cosechas y rebaños saqueados, puentes y torres de energía eléctrica dinamitados, fábricas incendiadas y maquinarias voladas.

Ante el fracaso de los métodos contrasubversivos utilizados durante los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García, el presidente Fujimori estableció como objetivo político prioritario de su gobierno: **“La Pacificación Nacional”**, ya que entiende que nunca podría atraer la inversión, fomentar el desarrollo, estimular el agro y la minería en un país devastado por la violencia.

Para alcanzar este objetivo político, diseñó una estrategia integral que buscó desde un primer momento: 1. Involucrar decididamente a todos sectores del Estado; 2. Estimular la participación organizada y voluntaria de la población en la solución del problema; 3. Reorganizar y optimizar la labor del sistema nacional de inteligencia y 4. Proporcionar el marco legal adecuado para alcanzar la victoria.

En la concepción de la estrategia diseñada por el nuevo gobierno, se dispuso que las acciones de desarrollo tengan prioridad sobre las que debían ejecutar en el ámbito militar, ya que el problema era principalmente político y social y no exclusivamente militar. Dicho en otros términos, la solución dejaba de estar a cargo casi exclusivo de los militares, y pasaba a ser responsabilidad de todo el Estado.

A partir de entonces, la acción de gobierno en las zonas convulsionadas por el terrorismo fueron fortaleciendo los vínculos con la población. El Fondo de Compensación y Desarrollo (FONCODES), el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), el Programa de Cooperación Popular (COOPOP), el Instituto de Infraestructura Educativa y de Salud (INFES), el Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR), las unidades y equipos de ingeniería del Ejército y en general los Ministerios de Transportes, Salud, Energía, etc. materializaron la presencia del Estado a través de la construcción de carreteras y caminos, inauguración de colegios e instalaciones de salud, funcionamiento de centrales eléctricas o grupos electróge-

nos o simplemente distribuyendo calaminas, plantones, ganado, maquinaria y herramientas, entre otras.

Asimismo, la presencia sorpresiva y continua del Presidente Fujimori en las comunidades más alejadas y pobres demostraba la preocupación del Jefe de Estado por informarse “in situ” sobre las necesidades de los pueblos, comprometerse a darle una solución, controlar el avance de las obras y entregarlas una vez concluidas. Así el helicóptero presidencial y los camiones de la Casa Militar - portando la ayuda social – se hicieron parte del paisaje general que permitió derrotar al terrorismo.

En respuesta al cambio de actitud de sus gobernantes y las FFAA, las poblaciones campesinas rechazaron definitivamente el proyecto terrorista y asumieron una participación más activa, organizada, controlada y convenientemente armada. La creación de Comités de Autodefensa (CCAD) fue un esfuerzo de las FFAA desde el inicio de la lucha y se realizaba paralelamente al esfuerzo de Sendero Luminoso por formar “Bases de Apoyo”, sin embargo, ambos fracasaron inicialmente por el grado de violencia desencadenado en la zona. La victoria se definió en el momento que las FFAA cambiaron su estrategia e hicieron uso en forma más racional de la fuerza dando prioridad a ganar la adhesión de la población mientras que SL radicalizaba la violencia.

Fue en 1991 cuando se tomó la decisión de armar masivamente a los campesinos. En 1992 se les proporcionó el marco legal necesario, promulgándose la ley que les reconoció el derecho a la posesión, uso de armas y municiones para su autodefensa. Para finales de 1991 existían en Ayacucho y Huancavelica 1,710 CCAD que participaban como fuerzas de control territorial y relevaban parcialmente a las unidades militares de esta tarea. Para 1997 se hallaban reconocidos a nivel nacional 5,878 CCAD integrados por 380,730 ronderos y equipados con 16,210 escopetas.

No debemos olvidarnos de los “desplazados” que según cifras aproximadas superaron los 500 mil pobladores. A pesar que casi desde el principio de la lucha, hubo intentos campesinos de retornar a sus tierras, la mayoría de ellos fracasaron y nuevamente migraron hacia zonas más tranquilas. Pocos lograron restablecerse pero sin recibir ayuda del Estado que eludió su responsabilidad. A partir de 1993, entró en funciones el Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR) que “propició el retorno de la población desplazada a sus lugares de origen, generando el desarrollo rural con la participación activa de las comunidades beneficiarias, brindando mejores condiciones de vida y seguridad, promoviendo mayor rentabilidad de la producción agropecuaria, así como diversificación de su economía”.

Para fines de la década pasada, miles de campesinos habían vuelto a sus pueblos, principalmente en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Junín. Por ejemplo, en 1997 hubo 28 retornos que beneficiaron a 6,287 personas y a los que - con el apoyo de los gobiernos de Suiza y Alemania - se les brindó vivienda, locales comunales, caminos carrozables y saneamiento básico.

WALTER E. JIBAJA ALCALDE